

23.^A REUNION - 18.^A SESION ORDINARIA - JUNIO 27 DE 1863

Presidencia del señor PAZ

Ministro presente: de justicia, culto e instrucción pública.

Senadores presentes: Alsina, Bárcena, Bustamante, Correa, Daract, Dávila, Elías, Fragueiro, Gallo, Gómez, González, Laspiur, Lucero Madariaga, Moreno, Navarro, Palma, Piñero, Posse, Uriburu, Vega y Villafañe.

Senadores ausentes, con aviso: Cullen, Ferré y Victorica.

SUMARIO

- 1.—Despacho de Comisión, y postergación del debate en particular del proyecto de ley sobre bancos libres por seguir indispuerto el señor ministro de hacienda, debiéndose continuar en la presente sesión con los proyectos de ley de justicia federal.
- 2.—Retiro del proyecto de ley de la Comisión de Legislación por el cual se aprobaban en globo seis proyectos del Poder Ejecutivo sobre la organización y procedimientos, etcétera, de la justicia federal, y aprobación en general de los seis referidos proyectos, debiéndose discutir en particular uno por uno.
- 3.—Se aprueba en particular con modificaciones el proyecto de ley número 1 relativo a la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales.

—En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de Junio del año del Señor de mil ochocientos sesenta y tres, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente del Senado y señores senadores arriba incriptos, con inasistencia del señor Cullen con aviso y de los señores Ferré y Victorica por indisposición, se abrió la sesión y se leyó el acta de la anterior de veinticinco del corriente (17.^a ordinaria), que fué aprobada.

1

Se dió cuenta de un despacho de la Comisión de Hacienda adjuntando un proyecto de ley, declarando deuda consolidada de la Nación, los

ochocientos setenta mil pesos, en títulos del empréstito de cuatro millones, proveniente de la ley de la Confederación de 1.^o de Octubre de 1860, enajenados en favor de Aldao y Compañía.

El señor presidente ordenó se diese a la orden del día de la sesión a que correspondiere.

Sr. Presidente. — No hay otro asunto de que ocuparse sino de los proyectos sobre tribunales de justicia nacional. El señor ministro de hacienda ha mandado decir que no puede aún concurrir. La Cámara dispondrá lo que se ha de hacer.

Sr. Palma. — Me permito renovar la moción que hice en la anterior sesión, para que entrase a discusión el proyecto sobre administración de justicia. Es verdad que se me dijo entonces que el inconveniente que había para hacerlo, era que no se podía suspender el debate, pero también el señor senador que manifestó esa observación, debe tener presente, que así como se ha suspendido la unidad del debate, puesto que no se puede entrar a discutir el asunto bancos, mientras no venga el señor ministro, creo no hay inconveniente en tratar el otro que indicé, porque en caso de no poderse concluir, se suspendería también.

Sobre todo, es preciso aprovechar el tiempo. No creo justo que porque el señor ministro no pueda venir, el Senado haya de perder su tiempo.

Por otra parte, el asunto sobre el que llamo la atención de la Cámara, es de más urgencia e importancia que el de bancos.

En esta virtud pido el apoyo de mis honorables colegas.

—Apoyado.

—Puesta a votación la moción anterior, fué sancionada por afirmativa general.

Sr. Presidente. — Al tratar este asunto es natural llamar al señor ministro de justicia; si a la Cámara le parece pasaremos a cuarto intermedio para verificarlo.

2

—En segunda hora y con asistencia del señor ministro se dió lectura del siguiente:

Proyecto de ley de la Comisión de Legislación

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Apruébanse los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, para la organización y procedimientos del Poder Judicial de la Nación, de los que:

El número 1º trata de la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales;

El número 2º define los crímenes que son de la competencia de dichos tribunales, y establece su penalidad;

El número 3º regla los procedimientos de dichos tribunales en lo civil y criminal, en 1ª y 2ª instancia;

El número 4º establece el arancel de costas y derechos judiciales;

El número 5º organiza los juzgados de sección, y sus empleados subalternos; y

El número 6º que trata de la autenticación de los actos públicos y procedimientos judiciales de cada provincia para valer en todas las demás, con arreglo a lo prescripto en el artículo 7º de la Constitución.

Art. 2º — La Corte Suprema de Justicia queda encargada de informar oportunamente al Poder Ejecutivo, las deficiencias o inconvenientes que se observen en la práctica de esta ley, para que éste lo haga presente al Congreso para su corrección o mejora.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

Navarro. — Palma. — Uriburu.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1863.

A la Honorable Cámara de Senadores.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de presentar al Congreso nacional, bajo los números de 1 a 7, los proyectos de ley adjuntos, que le han

sido remitidos por la Corte Suprema de Justicia, para recabar sobre ellos su sanción.

La institución de la justicia federal es una novedad en nuestro sistema político, que carece entre nosotros de precedentes de todo género que pudieran servir de guía. Viene ella a crear una jurisdicción especial, que necesitaba ser claramente deslindada, y cuyo mismo espíritu exigía procedimientos también especiales, que era forzoso fijar.

La ley de 16 de Octubre, sancionada en los últimos días del anterior período legislativo, bien puede decirse que se limitó a consignar los principios fundamentales que debieran servir de punto de partida a las disposiciones que sucesivamente debían perfeccionar este gran resorte de nuestro sistema político.

No es, pues, de extrañar que la Corte Suprema al iniciar sus funciones, encontrara la necesidad de definir más claramente la esfera de su jurisdicción, las atribuciones de los jueces, y sobre todo, de que se le marcara los procedimientos a que debiera ajustarse, y que la ley orgánica antes citada había olvidado designar.

Los varios proyectos que hoy se os presentan harán que pueda la justicia nacional marchar en adelante, desembarazada del conflicto de diversas jurisdicciones, del arbitrio de los jueces, y del abuso de los subalternos, que eran de temerse en materia tan nueva y tan desconocida. El gobierno espera que les prestaréis una especial atención.

Debe, sin embargo, recomendaros déis toda preferencia al que va marcado bajo el número 6, cuyo objeto es remover la principal causa que según ha tenido ya ocasión de manifestaros, ha obstado a que haya entrado en el ejercicio de sus funciones la justicia federal, autorizándola a seguir las leyes y prácticas de la provincia en que residan los tribunales nacionales, mientras no se sanciona el reglamento que uniforme los procedimientos. Este reglamento se registra bajo el número 3; pero su sanción puede demorar, y es urgente mientras tanto satisfacer una de las grandes y legítimas aspiraciones de la República.

El ministro del ramo os dará las explicaciones que creyereis necesarias sobre estos diversos proyectos.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

BARTOLOMÉ MITRE.
Eduardo Costa.

Sr. Navarro. — Como miembro informante de la Comisión de Legislación, señor presidente, tengo encargo de manifestar a la Cámara que

ella no encuentra razón para variar el dictamen que ha tenido el honor de presentarle; insiste en que ese negocio se vote en globo. Si acaso hubieran algunas objeciones contra este proceder, los miembros de la Comisión nos haríamos un honor en procurar satisfacerlas, y en último resultado, estamos a lo que la Cámara resuelva.

Sr. Laspiur. — La manera como la Comisión de Legislación aconseja a la Cámara la adopción de los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, sale de las formas establecidas por la Constitución para la formación y sanción de las leyes.

El Poder Ejecutivo ha presentado varios proyectos de ley sobre distintas materias, todos tendientes a la organización de la justicia federal, y la Comisión formula un nuevo proyecto de ley para aprobar aquéllos. Esta forma no está establecida en la Constitución.

Si la Comisión de Legislación hubiera aconsejado a la Cámara la aceptación de los diversos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, entonces la Cámara los tomaría uno por uno para considerarlos. Así el proyecto presentado no puede admitirse porque no es forma admitida en la Constitución. Eso por lo que respecta al artículo 1º que abraza todos los proyectos de ley, y en cuanto al 2º tampoco puede ser aceptado, porque ese artículo impone deberes a la Corte Suprema, que la Constitución no tiene establecidos, y no se pueden imponer deberes y obligaciones que no estén establecidos o determinados expresamente en la Constitución.

Si esto importa una revolución que está en el arbitrio del Supremo Tribunal aceptar, o no, no consta en una ley que debe hablar en términos imperativos.

Por consiguiente he de estar en contra del dictamen en general.

Sr. Navarro. — En cuanto a la primera parte de las observaciones que acaba de hacer el señor senador, diré, que la Comisión no hará una insistencia tenaz en que se observe esa forma, sin embargo que no la encuentra inconstitucional para que sean aprobados en concreto los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, pues que también se han aprobado contratos celebrados por aquella autoridad que son también leyes.

Habiéndose presentado estos proyectos que son varios y de distinta naturaleza, sería redundante estar poniendo en cada uno: el Senado y Cámara de Diputados, etcétera.

Todo esto forma, como ha dicho la Comisión, dos pequeños códigos; uno de procedimiento

y otro penal. No importa, pues, nada para la sanción que se ponga en cada proyecto esa fórmula, o que sean comprendidos bajo una fórmula general.

Como esos proyectos era preciso designarlos de alguna manera, la Comisión ha creído hacerlo diciendo: el 1º tal cosa, el 2º tal otra, etcétera. No creo que haya inconstitucionalidad ninguna, ni que las fórmulas para las leyes sean fórmulas sacramentales que sea preciso guardar hasta en la materialidad de las palabras. Bastan, en mi concepto, que el Congreso apruebe un proyecto, para que sea ley; lo demás son formas que pueden variar según las circunstancias.

Ahora, en cuanto a la 2ª observación, sobre el artículo 2º del proyecto, no la creo fundada, porque una ley orgánica tiende a imponer a los tribunales su deber y obligaciones; mucho más cuando la Constitución después de crear la Corte Suprema y de conferirle ciertas atribuciones, ha dicho, que el Congreso dará las formas bajo las que esos tribunales habrán de expedirse, porque, dice el artículo 101 de la Constitución: los tribunales se expedirán con arreglo a las leyes que sancionará el Congreso.

No creo, pues, que haya dificultad en que se sancione lo que la Comisión propone, tanto más, cuanto que eso es necesario para remediar inconvenientes que quizá no se han podido prever al confeccionarse las leyes.

De consiguiente, no cree la Comisión que haya inconveniente en aprobar el proyecto que aconseja.

Sr. Palma. — Agregaré algo más en apoyo de las observaciones que acaba de hacer el señor miembro informante de la Comisión de Legislación.

La Comisión cuando pasó a discutir estos proyectos, le fueron presentados en globo y todos ellos fueron despachados casi simultáneamente con el gobierno. De consiguiente, la Comisión se propuso hacer un pequeño código para que estuviesen reunidas en un solo cuerpo todas las disposiciones, y para facilitar su estudio a los abogados y jueces.

La Comisión, para presentar un trabajo más perfecto, tuvo a bien citar a los miembros que componen la Excelentísima Corte Suprema, a todas sus discusiones, al mismo tiempo que al señor ministro del culto. Así es, que el trabajo ha sido de acuerdo con ellos. En virtud, pues, de que la Comisión ha tenido a su lado personas tan caracterizadas en la ciencia, ha creído con razón, que podía pedir al Senado un voto de confianza, a fin de que los proyectos sean sancionados en globo.

He oído decir a un señor senador, que la forma en que la Comisión presenta su dictamen, es inconstitucional; pero no es así, porque lo único que se establece, son las atribuciones generales del modo cómo se sancionan las leyes. Las formas como se han de presentar los proyectos a discusión, son materia del reglamento de debates y no de la Constitución.

Ahora se dice también, que la aprobación en globo de todo el proyecto, es una cosa impropia; no lo creo; y en apoyo de mi opinión, puedo citar algunos casos en que así se procedió.

El año pasado el Congreso sancionó por una sola votación el Código de Comercio, y por igual medio, sancionó también el año próximo pasado, la ley que estableció y reglamentó la Corte Suprema Federal en la República; quedando únicamente para discutirse por separado, la parte relativa a los jueces de sección; mas todo lo demás fué sancionado en globo.

Agregaré más; que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, hizo lo mismo respecto al Código de Comercio.

Además, la Comisión ha tenido presente, que el Congreso de los Estados Unidos ha procedido siempre de ese modo, acordando un voto de confianza.

La Comisión tiene, por fin, que hacer una última observación, respecto al último proyecto.

Ella está persuadida que estos proyectos han de tener defectos, y no pretende que sean perfectos; por eso, de acuerdo con los señores de la Corte Suprema, ha dejado a ella el cuidado de hacer las anotaciones que oportunas le parezcan, para poder al fin llegar a arreglar un todo lo más completo posible.

Estas razones, y otras muchas que no escaparán a la penetración de los señores senadores, son las que han guiado a la Comisión en la formación del proyecto que se discute.

Sr. de la Vega. — Si mis oídos no me han engañado, me parece haber oído decir al señor senador, que la forma de las leyes no es una prescripción constitucional, y sí del reglamento. En este caso diré que el artículo 68 dice: (*Ley*).

El modo como la Comisión se expide, es inusitado cuando dice: se aprueban los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, eso es lo mismo que hacer dos leyes: una aprobando tal proyecto, y otra el proyecto mismo. Esta práctica nunca se ha observado en esta Cámara, ni creo que se observará jamás. Entiendo que si en el proyecto de ley sobre bancos libres, hubiera venido la Comisión presentando un proyecto

distinto y diciendo: apruébase el proyecto sobre bancos libres, no se hubiera considerado.

Ha dicho uno de los señores de la Comisión, que ha creído hacer uno o dos códigos de los diversos proyectos; está equivocado. Los proyectos de ley no forman un conjunto completo; cada materia va por separado; cada proyecto lleva su encabezamiento. Para formar un solo cuerpo hubiera sido necesario que se dividieran en secciones, capítulos, etcétera.

Votaré, pues, en contra del proyecto de la Comisión, estando de acuerdo en el fondo con el pensamiento, es decir, con que se acepte en globo cada proyecto por separado.

Sr. Palma. — Quiero rectificar un aserto del señor senador, aunque hasta cierto punto, tiene razón. Realmente cada proyecto lo formula: el Senado y Cámara de Diputados, etcétera; más esto sucedió, porque cuando se mandaron los proyectos a la prensa, no se tuvo la oportunidad de quitarle, y reducirlos todos a un pequeño código. Pero como después se había de hacer una nueva impresión, ignorándose las reformas que la Cámara en ella introduciría, se convino en que entonces se borraría. He querido hacer esta rectificación al señor senador, para que comprenda que no ha escapado ese punto a la Comisión, sino que ha sido un descuido en la impresión.

Sr. Navarro. — Señor, no estoy por la doctrina de que haya una fórmula sacramental y necesaria, para que se tengan por sancionadas y válidas las leyes, sin cuyo requisito no lo serían. Acaba de citarse, por ejemplo, la adopción del Código de Comercio. El proyecto de la Comisión decía: declárase Código de Comercio nacional el de Buenos Aires, y con esta forma fué ley. No tuvo aquel encabezamiento y no por eso deja de tener fuerza completa.

A mi juicio, son pequeñeces que no valen la pena, y que no hay precisamente una fórmula sacramental, y raras veces las leyes exigen tales o cuales palabras.

Entre nosotros, creo que no hay más que una ley, la de imprenta, que exija que el Tribunal del Jurado, ante quien se lleva una acusación de imprenta, diga: ha lugar a formación de causa.

En el código francés, hay una que otra disposición, en casos muy particulares, en que se exijan fórmulas de palabras, de las que debe usar el juez o el tribunal.

Así es que no me parece que es motivo de perder tiempo, con una cuestión semejante.

Lo importante es, que ellas se promulguen en la forma ordinaria, lo que se conseguirá desde que se comuniqué de oficio su sanción.

Estas son leyes de diferente naturaleza, que no pueden formar un todo, y sin embargo, hay leyes que nos rigen, en que están incluídas, disposiciones civiles y criminales, como *las de Toro*, y después, los autores de la nueva recopilación y de la recopilación novísima, las han colocado en los distintos títulos, sin que por eso dejen de ser leyes.

Sr. Ministro de Justicia. — Sensible es, señor presidente, que una ley como esta, haya de votarse en silencio. Muchas mejoras podía recibir de las luces de los señores senadores, y mucho importaría también, que el pueblo se impusiera de las grandes ventajas que con ella va a reportar, la tramitación de los juicios. La Comisión ha hecho notar juiciosamente muchas de esas ventajas. En adelante, el procedimiento que la Corte de Justicia ha aconsejado, va a ser un remedio a la chicana; va a cortar en mucho la tramitación de los juicios. Dará también, en el modo de recibirse las pruebas, una gran ventaja sobre el procedimiento antiguo. En fin, sería muy largo de enumerar las mejoras que el sistema propuesto por el tribunal de justicia, y que es juiciosamente aconsejado por la Comisión de Legislación de esta Cámara va a introducir en nuestro sistema de enjuiciamiento.

Por esto he dicho, que es muy sensible que una ley como esta se vote en silencio, porque cuando más se discutiera, tanto más perfecta sería, y tanto más se ilustraría al pueblo. Sin embargo, la Comisión ha tropezado con un inconveniente grandísimo. Si esta ley fuera a discutirse como todas las leyes artículo por artículo, se emplearía un tiempo muy considerable; tendría después que pasar por un nuevo examen en la Cámara de Diputados, y como es cosa imposible que no sufriera modificaciones, vendría nuevamente a esta Cámara; de donde resultaría que no podría ponerse en ejecución en este año. Mientras tanto, señor, es bien sabido que el país espera con impaciencia el ejercicio de la justicia federal, que como se ha dicho, es un poder moderador que conserva a los demás poderes en los límites de sus respectivas atribuciones, y será una garantía más de estabilidad para el porvenir de la República. No era, pues, posible postergar por un año más la ejecución de la ley que estableció la justicia federal, sin perjuicio de los intereses generales. Ante esta necesidad la Comisión juiciosamente, aconseja a la Cámara que sancione los proyectos que se han presentado, por un voto de confianza sin entrar a discutir artículo por artículo.

Felizmente esta práctica no es sin precedentes en otros países en que se han sancionado códigos. En Francia, en Chile, y entre nosotros mismos se han sancionado de esa manera, valiéndose de los conocimientos especiales de los hombres a quienes se había confiado el trabajo de la redacción. Eso es lo que ha sucedido con respecto al Código de Comercio, tanto en la provincia de Buenos Aires, como en las Cámaras nacionales, las que han mandado poner en vigencia sin discusión anterior el código redactado por los señores Acevedo y Vélez Sársfield.

No hay, pues, inconveniente, ni creo que lo tiene el Senado, en sancionar de la misma manera el proyecto presentado por la Corte Suprema de Justicia.

Seáme permitido ahora, señor presidente, tributar un homenaje de respeto a los señores de la alta Corte de Justicia. Se han formulado algunos cargos contra ella en la prensa, y en la opinión pública, porque no principiaba sus trabajos inmediatamente. Ella, presentando un importante proyecto, ha contestado a esa inculpación y demostrado que era muy difícil, si no imposible, haber procedido sin que él hubiera sido sancionado; que había ofrecido gravísimos inconvenientes esta institución, tan nueva entre nosotros, sobre la que ni aún los abogados tienen nociones claras, entrar a ponerla en ejercicio, sin que antes se fijara una regla para resolver las cuestiones que sin duda se habían de presentar; sin establecer cuáles son los casos, sin determinar con precisión sobre qué materias había de recaer su jurisdicción, era muy de temerse que hubiera traído una confusión muy grande entre la justicia ordinaria y la federal, a la que se provee por esta ley.

Además, la tramitación habría ofrecido gravísimos inconvenientes. Es sabido que en todas las provincias rigen las mismas leyes. Si se hubiera dejado a cada una la ley que estuviera en vigencia, era muy difícil que la Cámara de Justicia estuviera en situación de poder apreciar si los jueces se habían ajustado o no a la ley de procedimientos, tan importante para muchos casos. Por ejemplo, para los delitos nada había establecido en nuestro código a ese respecto, y la Corte de Justicia vendría a encontrarse en grandes embarazos, cuando se presentara un criminal a quien juzgar especialmente por ciertos delitos, por los que no podría ser juzgado por las leyes que hasta ahora han regido entre nosotros.

Por estas razones se ve que la Corte Suprema de Justicia obró muy cuerdamente al no

dar principio a sus funciones sin antes preparar bien el terreno.

Creo, señor presidente, que estas palabras bastarán para justificar el apoyo que el gobierno presta al proyecto de la Comisión.

Ahora en cuanto a la forma en que viene redactado, creo que es indiferente y me parece haber oído a algunos de los señores miembros de la Comisión que ella aceptaría cualquiera moción que se proponga. Por tanto, me parece, que el señor senador formulará la proposición, para si se rechaza el dictamen de la Comisión, por su forma, se considerase la otra.

Sr. Alsina. — O yo he entendido malísimamente el espíritu del proyecto que se ha leído, o a mi ver, la discusión que se ha entablado se extravía.

Lo que está en discusión es un proyecto que dice: «apruébase el proyecto 1º, tal como está, sobre tal materia; apruébase el 2º, sobre tal otra, etcétera.» A esto se ha opuesto un argumento relativo a sólo la redacción; nada más. ¿Se aprueba ese proyecto o no? Esta es por ahora la única cuestión.

Es verdad que un miembro de la Comisión ha pedido, además, un voto de confianza, y otro señor senador ha dicho que se podían considerar en globo los proyectos, más todo esto ya constituye otra cuestión. Por lo pronto, sólo se trata de saber si se ha de aprobar o no aquel proyecto; y por tanto, estamos perdiendo tiempo con cosas que no son de la cuestión.

Por lo demás, no creo que se insista en que se aprueben esos proyectos en globo, si eso ha de importar que se aprueben sin ningún examen ni discusión, pues son cosas muy distintas. En cuanto a la forma que propone un señor senador, ella es indudablemente la mejor; y además, ni es de utilidad, ni puede haber interés en la Comisión en que no sea usada. ¿Qué le importa, con tal que los proyectos sean aprobados, el que ellos sean encabezados en la forma común, es decir, con: «el Senado y Cámara de Diputados, etcétera»? Sobre todo: en todo caso, y si hubiera de redactarse por separado un proyecto aprobatorio de los seis que se presentan, eso correspondería hacerse después que se hubiera acabado de considerarlos, pero nunca deberíamos empezar por una aprobación anticipada. Así, me parece que el procedimiento es sumamente sencillo. Los proyectos, no forman código, no forman un cuerpo. Se versan sobre distintas materias, sobre lo civil y lo criminal, y está mezclado con ellos, la parte dispositiva con la parte referente a los procedimientos; y además, cada proyecto ter-

mina con la fórmula de estilo en las leyes sueltas y separadas, «Comuníquese, etc.», lo que es ajeno de un código.

Vamos, pues, a lo esencial, a los seis proyectos, y para ello, dando por supuesto que la Comisión no insistirá en su previo proyecto aprobatorio de ellos, determinemos de una vez si los adoptamos a ciegas, por un voto de confianza, o bien en globo, pero con algún examen; y en este caso, si ese examen a la ligera ha de ser de todos ellos a la vez, o uno por uno, etcétera, y dejemos de estar detenidos con cuestiones estériles absolutamente.

Sr. Laspiur. — Voy a manifestar cuál era mi pensamiento que ha deseado conocer el señor ministro, cuando he hecho oposición al proyecto en general. Mi pensamiento es que este proyecto de la Comisión debe eliminarse de la discusión de la Cámara, y principiarse por los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo y que la Comisión aconseja aceptar.

Por consiguiente, la discusión debiera empezar por el proyecto número 1º, que tiene la fórmula constitucional: «El Senado y Cámara de Diputados, etc.», y que concluye: «Comuníquese al Poder Ejecutivo». Después pasaremos al 2º y así sucesivamente. Cuando se tome en consideración el primer proyecto, vendrán bien las indicaciones de la Comisión pidiendo un voto de confianza. Pero de ninguna manera es posible considerar el proyecto que ya ha presentado.

Sr. Palma. — Creo, señor, que el modo como debe tratarse la cuestión, es tal como la ha presentado el señor senador por Buenos Aires. La Comisión no insiste en que recaiga una votación sobre el proyecto que ha presentado, porque la forma es lo menos esencial. Lo que importa es resolver sobre el voto de confianza que ella pide. El voto de confianza importa si el Senado da, o no, una aprobación general a todos los proyectos. Si lo da, la Comisión lo formulará en la forma aprobatoria; en caso contrario, puede entrarse a discutir proyecto por proyecto. De consiguiente, creo que el modo cómo debe procederse es sobre el voto de confianza, dejando la fórmula si se cree que está equivocada, para reconsiderarse después.

Sr. Alsina. — ¿La Comisión conviene en que no se considere el proyecto que se ha leído?

Sr. Palma. — Es de fórmula.

Sr. Uriburu. — A mi juicio la Comisión no insiste en sostener su proyecto en la forma que lo presentó. Por lo tanto, pediría al señor

senador que hace oposición a la fórmula, que presente la que crea más constitucional.

Sr. Alsina. — El Senado y Cámara de Diputados, etcétera; esa es la fórmula.

Sr. Uriburu. — Ahora, pues, debe limitarse el voto de la Cámara a expresar si aprueba en globo los proyectos, y así esta aprobación viene a hacer inútil la discusión en particular. Hay proyectos que contienen trescientos y tantos artículos, y esa discusión en particular invertiría quizá todo el tiempo precioso que poder destinar a otros asuntos.

Sr. Laspiur. — Me parece que para proceder con la posible brevedad en este asunto, lo primero que debe hacerse es ponerse a votación el dictamen de la Comisión, y después se dirá si es necesario que se lea el proyecto.

Sr. Presidente. — Voy a decir cómo entiendo el procedimiento que hay que seguir. Después que se vote en general el proyecto de la Comisión, si es aprobado, entra la discusión en particular, y entonces será el momento de decir si ha de considerarse los proyectos en globo, o uno por uno.

Sr. Bustamante. — Puesto que la Comisión no insiste en sostener la fórmula que ha presentado, yo entiendo que lo que está en discusión es el proyecto número 1, y que al votarse va a decidirse si se aprueban los proyectos en general. Yo entiendo que está en general la discusión del proyecto número 1; si habrá discusión en particular, lo decidirá después el Senado.

Sr. Presidente. — Si la Cámara lo resuelve así, se hará; lo que sí es que no se ha hecho una moción sobre la cual pueda recaer una votación.

Sr. Bustamante. — Yo la hago, puesto que no se ha hecho antes.

Sr. Navarro. — No tiene inconveniente la Comisión, porque su objeto es que se aprueben por un voto de confianza todos los proyectos que presenta la Corte Suprema. La Comisión bien pudo limitarse a su informe escrito, pero quizá sin mayor meditación creyó que debía concretar ese pensamiento, desenvuelto en el informe, en un proyecto de ley. De todos modos, no hay inconveniente en que se ponga la votación como acaba de indicarse.

Sr. Presidente. — Está en discusión en general el proyecto número 1.

Sr. Alsina. — No hay inconveniente en que se ponga en general a discusión todos los proyectos, porque eso no quiere decir que después no se discuta proyecto por proyecto.

Sr. Laspiur. — No podemos votar por todos los proyectos, porque cada uno forma una ley

por separado. Debe ponerse a consideración, el primer proyecto en general, y si es aprobado, pasar al segundo.

—Dado el punto por suficientemente discutido, se puso a votación si se aprobaban los proyectos en general, y así se resolvió por afirmativa general.

3

—Púsose en seguida en discusión el proyecto número 1.

Núm. 1

Jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La Suprema Corte de Justicia nacional conocerá en primera instancia:

- 1º De las causas que versen entre dos o más provincias;
- 2º De aquellas que versen entre una provincia y un Estado extranjero;
- 3º De las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que componen la legación, a los individuos de su familia, o sirvientes domésticos, del modo que una corte de justicia puede proceder con arreglo a derecho de gentes;
- 4º De las causas en que se versen los privilegios y exenciones de los cónsules y vicecónsules extranjeros en su carácter público.

Art. 2º — Los jueces nacionales de sección conocerán en primera instancia de las causas siguientes:

- 1ª Las que sean especialmente regidas por la Constitución nacional, las leyes que haya sancionado y sancionare el Congreso, y los tratados públicos con naciones extranjeras;
- 2ª Las civiles que versen entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros;
- 3ª Las causas civiles en que sean partes un vecino de la provincia en que se suscite el pleito y un vecino de otra, o en que sea parte un ciudadano argentino y un extranjero;

- 4ª Las que versen sobre negocios particulares de un cónsul o vicecónsul extranjero;
- 5ª Todo pleito que se inicie entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del gobierno nacional;
- 6ª Toda acción fiscal contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades debidas o por cumplimiento de contratos o por defraudación de rentas nacionales, o por violación de reglamentos administrativos;
- 7ª En general todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte actora, solicitando la ejecución de una ley o reglamento nacional;
- 8ª Todas las causas a que den lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra;
- 9ª Las que se originen por choques y averías de buques, o por asaltos hechos, o por auxilios prestados en alta mar, o en los puertos, ríos y mares en que la República tiene jurisdicción;
10. Las que se originen entre los propietarios o interesados de un buque, sea sobre su posesión o sobre su propiedad;
11. Las que versen sobre la construcción y reparos de un buque; sobre la hipoteca de su casco: sobre fletamentos y estadías; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería simple y gruesa; sobre contratos a la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embargos de buques y penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente, o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán y tripulantes; y en general sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo.

Art. 3º — Los jueces de sección conocerán igualmente de todas las causas de contrabando y de todas las causas criminales cuyo conocimiento compete a la justicia nacional; a saber:

- 1º Los crímenes cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros serán juzgados por el

juez de sección del primer puerto argentino a que arribase el buque;

- 2º Los crímenes cometidos en los ríos, islas y puertos argentinos serán juzgados por el juez que se halle más inmediato al lugar del hecho, o por aquel en cuya sección se encuentren los criminales, según sea el que prevenga en la causa;
- 3º Los crímenes cometidos en el territorio de las provincias en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas, u obstruyan o corrompan el buen servicio de sus empleados, o violenten o estorben la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda nacional, o de billetes de banco autorizados por el Congreso, serán juzgados en la sección judicial en que se cometieren;
- 4º Los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, serán juzgados por los jueces de sección allí existentes

Art. 4º — La Corte Suprema conocerá por apelación de las sentencias definitivas y de todo auto que tenga fuerza de definitivo en todas las causas criminales iniciadas ante los jueces de sección, y en las civiles que quedan expresadas, siempre que el valor disputado exceda de la cantidad de doscientos pesos fuertes, y la sentencia de segunda instancia, sea que confirme o revoque, causara ejecutoria.

Art. 5º — Las cuestiones que se susciten entre los individuos de la tripulación de un buque mercante, o entre alguno de ellos y su capitán u otros oficiales del mismo, y cuya importancia no pasa de cincuenta pesos, serán decididas en juicio verbal por el capitán del puerto donde se halle el buque con apelación para ante el juez de sección, que conocerá también en juicio verbal.

Art. 6º — Siempre que un juez de sección se excuse de conocer en una causa de su competencia, o retarde el administrar justicia, se podrá ocurrir a la Corte Suprema por el recurso de justicia denegada o retardada y siempre que conozca de causa que no le compete, y rehusare inhibirse, podrá igualmente apelarse a la Corte, que resolverá el artículo según su mérito.

Art. 7º — La jurisdicción criminal atribuída por esta ley a la justicia nacional en nada altera la jurisdicción militar en los casos en que, según las leyes existentes, deba procederse por consejos de guerra.

Art. 8º — En las causas entre una provincia y vecinos de otra, o entre una provincia y un súbdito extranjero, o entre un ciudadano y un extranjero, o entre vecinos de diversas provincias, para surtir el fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa pertenezca originariamente, y no por cesión o mandato, a ciudadanos, extranjeros o vecinos de otras provincias respectivamente.

Art. 9º — Las corporaciones anónimas creadas y haciendo sus negocios en una provincia, serán reputadas para los efectos del fuero, como ciudadanos vecinos de la provincia en que se hallen establecidas, cualquiera que sea la nacionalidad de sus socios actuales.

Art. 10. — En las sociedades colectivas, y en general en todos los casos en que dos o más personas asignables pretendan ejercer una acción solidaria o sean demandadas por una obligación solidaria para que caigan bajo la jurisdicción nacional, se atenderá a la nacionalidad o vecindad de todos los miembros de la sociedad o comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tenga el derecho de demandar o pueda ser demandado ante los tribunales nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 2º.

Art. 11. — La vecindad en una provincia se adquirirá para los efectos del fuero, por la residencia continua de dos años, o por tener en ella propiedades raíces, o un establecimiento de industria o comercio, o por hallarse establecido de modo que aparezca el ánimo de permanecer.

Art. 12. — La jurisdicción de los tribunales nacionales en todas las causas especificadas en los artículos 1º, 2º y 3º, será privativa excluyendo a los juzgados de provincia, con las excepciones siguientes:

- 1º En todos los juicios universales de concurso de acreedores y partición de herencia, conocerá el juez competente de provincia, cualquiera que fuese la nacionalidad o vecindad de los directamente interesados en ellos, y aunque se deduzcan allí acciones fiscales de la Nación;
- 2º En los lugares en que no haya establecido jueces de sección, o que se halle distante la residencia de éstos, los fiscales o colectores de rentas, o indivi-

duos comisionados al efecto, podrán demandar a los deudores del fisco ante los jueces de provincia;

- 3º Cuando se cometiere un crimen de los que por esta ley caen bajo la jurisdicción nacional los jueces de provincia de cualquier categoría, podrán aprehender a los presuntos reos que pondrán a disposición del juez nacional de sección correspondiente, con la remisión del sumario que hayan levantado para justificar la prisión;

- 4º Siempre que en pleito civil un extranjero demande a una provincia o a un ciudadano, o bien el vecino de una provincia demande al vecino de otra ante un juez o tribunal de provincia; o cuando siendo demandados el extranjero o el vecino de otra provincia, contesten a la demanda, sin oponer excepción de declinatoria, se entenderá que la jurisdicción ha sido prorrogada, la causa se substanciará y decidirá por los tribunales provinciales, y no podrá ser traída a la jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el artículo 14.

Art. 13. — Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo nacional prestarán todo auxilio para la ejecución de las sentencias del Poder Judicial; y siempre que un juez nacional dirija un despacho precatorio a un juez provincial, sea para hacer citaciones, o notificaciones o recibir testimonios, o practicar otros actos judiciales, será cumplido el encargo. Y siempre que un alguacil u oficial ejecutor presente una orden escrita de un juez o tribunal nacional para ejecutar una prisión o embargo, las autoridades provinciales y personas particulares estarán obligadas a prestar el auxilio que él les requiera para el cumplimiento de su comisión.

Art. 14. — Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial; y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes:

- 1º Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión haya sido contra su validez;

2º Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia;

3º Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada, y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funde en dicha cláusula y sea materia del litigio.

Art. 15. — Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez o inteligencia de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputas, quedando entendido que la interpretación o aplicación que los tribunales de provincia hicieren de los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, artículo 67 de la Constitución.

Art. 16. — En los recursos de que tratan los dos artículos anteriores, cuando la Corte Suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada, o bien resolverá sobre el fondo y aun podrá ordenar la ejecución especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón.

Art. 17. — La Corte Suprema decidirá sobre las competencias que se susciten a instancia de parte sobre jurisdicción de los jueces nacionales y provinciales.

Art. 18. — La Corte Suprema podrá establecer los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos con tal que no sean repugnantes a las prescripciones de la ley de procedimientos.

Art. 19. — La Corte Suprema y los jueces de sección tendrán la facultad de corregir con multas que no excedan de cincuenta pesos fuertes, o prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieren contra su dignidad en los alegatos o las audiencias de las causas, y las que sus subalternos u

otras personas cometiesen contra su autoridad, obstruyendo el curso de la justicia o en daño de las partes, sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños causados.

Art. 20. — Cuando un individuo se halle detenido o preso por una autoridad nacional, o a disposición de una autoridad nacional, o so color de una orden emitida por autoridad nacional, o cuando una autoridad provincial haya puesto preso a un miembro del Congreso, o a cualquier otro individuo que obre en comisión del gobierno nacional, la Corte Suprema o los jueces de sección podrán, a instancia del preso o de sus parientes o amigos, investigar sobre el origen de la prisión, y en el caso de que ésta haya sido ordenada por autoridad o persona que no esté facultada por la ley, mandarán poner al preso inmediatamente en libertad.

Art. 21. — Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones, procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancionase el Congreso, los tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento en el orden de prelación que va establecido.

Art. 22. — Las causas que se hallen pendientes ante los tribunales de provincia a la promulgación de esta ley, serán terminadas y fenecidas en los mismos tribunales, aunque por su materia o por las personas interesadas en ellas pudieran pertenecer a la jurisdicción nacional.

Art. 23. — La presente ley será considerada como adicional y correctiva de la de 16 de Octubre de 1862.

Art. 24. — Comuníquese, etc.

Eduardo Costa.

Sr. Navarro. — La Comisión a este respecto no tiene más que decir, sino que, si respecto de las disposiciones que contiene este proyecto se suscita alguna observación, la Comisión se hará un deber en satisfacerla. Todas las disposiciones que contiene han sido larga y detenidamente discutidas en la Comisión, y consultada la Corte Suprema; de consiguiente, la Comisión insiste que sea sancionado el proyecto.

Sólo agregará una cosa, y es que como esta materia se ha considerado de mucha urgen-

cia, y se consideró que podría entrar en discusión antes de la de los bancos libres, se procuró mandar con toda brevedad a la imprenta. Desgraciadamente fué necesario hacer la impresión con tanta prisa, que la impresión ha salido algo incorrecta, y para remediar ese mal se ha puesto una fe de erratas, con la que satisfará la Comisión a cualquiera observación que en el texto se haga.

Sr. Alsina. — Yo desearía adherirme a la opinión de que estos diferentes proyectos sean elevados al carácter de ley por un voto ciego de confianza. Tengo el mejor concepto de las luces de los señores que han intervenido en su redacción o formación; pero creo que esto no es lo bastante. No por eso diré yo, ni pediré, ni propondré, que cada proyecto sea examinado artículo por artículo, sino simplemente, que puesto en discusión general el todo de uno de ellos, aquellos artículos sobre los cuales se susciten objeciones o reparos, sean discutidos y votados, y todos los demás sobre los que no haya observación alguna, se reputen aprobados, sin necesidad de votación. Este es el modo más breve de conseguir en lo posible los objetos que la Comisión se propone, cuando ha pedido un voto de confianza.

No puede darse así absolutamente ese voto, en mi opinión, al menos, porque yo, aunque no he hecho una sola lectura de estos diferentes proyectos, he encontrado ciertas cosas a las que no puedo dar mi aprobación.

Sin embargo, acerca de algunos puntos no haré sino exponer mis dudas, sin formular una cuestión o moción; pero tal vez acerca de otros pida revocación de tal o tal disposición. Entre tanto, considerando un proyecto del modo que he indicado, se abrevia muchísimo el examen de todos. Tenemos que sacrificar tal vez el acierto a esa necesidad de brevedad que tanto se invoca, ya que la Corte Suprema ha creído, como lo dicen todos, y como lo acaba de repetir el señor ministro, que se veía trabada en sus procedimientos, por falta de estas disposiciones, acerca de lo cual yo podía hacer ciertas observaciones, en el sentido de que no es así. Pero ya que viene tarde este asunto y a pesar de que mucha parte de esa demora ha podido evitarse por la Corte Suprema, como ha podido salvarla, en parte, la Comisión de Legislación del Senado, procuremos que haya la posible brevedad en la discusión.

Pero esta brevedad no puede, no debe, no conviene que sea tal, que a ojos cerrados aprobemos. Oigo que se habla mucho de la urgencia de esta sanción; pero entre tanto, señor, yo no veo esa urgencia tan decantada, ven-

dría eso bien si los jueces de sección estuvieran ya en sus puestos y no esperasen sino esta ley, para empezar a funcionar; pero no es así.

La Corte Suprema dice que ella no podía hacer nada, porque no estaban instalados los juzgados de sección. Muy bien; que pase esta ley así, que se sancione por un voto de confianza, ¿ya quedan consolidados esos juzgados? No, señor. Apenas, ahora pocos días, ha sido cuando el Senado ha prestado su acuerdo para el nombramiento de los diferentes señores que han de desempeñarlos. Ellos, después que comuniquen su aceptación, tienen que hacer viaje a las diferentes provincias, y que practicar allí varias diligencias, para poder plantear y abrir sus oficinas. ¿Cuándo se calcula, según esto, que los juzgados empezarán a funcionar? Tal vez será de aquí a 40 ó 60 días. De modo que, aunque se sancionasen hoy mismo todos estos proyectos, nada se aventajaría, va a continuar la Corte Suprema en esa misma imposibilidad de funcionar, en que dice haberse hallado hasta hoy. ¿Por qué, pues, no hemos de poder, no diré detenernos demasiado, pero al menos un poco, en la consideración de estos proyectos? Mientras esos señores se preparan para su viaje y llegan a sus destinos, tiempo sobrado tiene el Congreso para prestar tal o cuál atención a este negocio. Así, no es la razón de urgencia la que pesa en mi ánimo, sino la de conveniencia, porque realmente, estos proyectos contienen numerosas disposiciones, y se versan sobre objetos tales, que jamás puedan ser considerados en esta clase de cuerpos minuciosamente, y arrojando por artículo.

Contrayéndome ahora a lo substancial del asunto, como no quiero promover cuestiones que traigan una verdadera demora, callaré ciertas observaciones que en la materia jurisdiccional pueden hacerse, y me ceñiré simplemente a preguntar si entiende la Comisión que por la aprobación de este primer proyecto queda derogada una parte de otra ley nacional que existe, y que el Congreso mandó observar en toda la República, es decir, el Código de Comercio.

En el Código de Comercio está reglamentado todo lo concerniente a contratos a la gruesa, a averías, a fletamientos y a todos los contratos y actos de navegación y comercio marítimo. Ya eso está establecido, y está establecido también que el conocimiento de todo eso pertenezca a la justicia que haya en las provincias.

Ahora viene esta ley y establece en uno de sus artículos, que el conocimiento de todas esas causas pertenece a la justicia nacional; de

modo que en esa parte, viene a quedar abolida la jurisdicción que se atribuyó a la justicia provincial en el Código de Comercio. No entro a preguntar por qué no se adscribe a la justicia nacional muchos de esos objetos; pero tampoco me opongo a ello. Quisiera saber solamente, cómo se concilia en esta parte la ley actual con la anterior que se sancionó, y que se mandó observar en todas las provincias. Nada más que esto.

Sr. Navarro. — No sería extraño, señor presidente, que habiéndose aprobado por un voto de confianza el Código de Comercio hecho para la provincia de Buenos Aires, se encuentren en él disposiciones que puedan estar en pugna o en oposición con algunas de las disposiciones que se han formulado en estas leyes; pero por regla general, las leyes últimas derogan a las anteriores cuando están en oposición. En este mismo proyecto hay un artículo por el cual se dejan en vigor todas las leyes anteriormente dictadas que no estén en oposición con ésta, de manera que si en la práctica se encuentra alguna disposición de este proyecto en oposición con otras del Código de Comercio, naturalmente que las del Código de Comercio se entenderán derogadas por ésta. Si eso trajera algunos inconvenientes, los tribunales están encargados de hacer que se pongan en armonía unas leyes con otras. El Código de Comercio, como que era dado para una provincia donde había un tribunal destinado especialmente para los asuntos de comercio, naturalmente debió acudirse a esta circunstancia. Ahora los tribunales nacionales tienen que ser naturalmente los tribunales competentes para conocer en las materias de comercio, porque todo lo que se refiere al comercio exterior, pertenece a la competencia de los tribunales nacionales, por el derecho y las obligaciones que tiene la Nación respecto de los extranjeros y de los buques de comercio, así como por las obligaciones y los derechos que tienen los extranjeros para con la Nación, por los tratados y los principios de derechos de gentes.

Esto no implica que algunas causas de comercio, como lo dice el proyecto, puedan ventilarse o tratarse en los tribunales de provincia, como las testamentarias que son de jurisdicción concurrente con los tribunales de provincia, con apelación para ante la Corte Suprema, para aquellos casos en que se interese la Constitución, alguna ley del Congreso, algún tratado o alguno de los actos que son del fuero de los tribunales nacionales. Todos los demás casos pueden ser discutidos en los tribunales de provincia.

Creo, pues, que las observaciones que ha hecho el señor senador por Buenos Aires, no ofrecen dificultad para que sea aprobado este proyecto.

Sr. Alsina. — ¿Qué es lo que se va a votar? Si se va a votar el proyecto, antes quisiera que los señores de la Comisión tuvieran la bondad de ilustrar algo al Senado sobre algunos puntos. Por ejemplo: yo creo que los procesos que se versen en diversas provincias según la Constitución, competen a la Suprema Corte, y en el proyecto se adscribe su conocimiento a los juzgados seccionales.

Sr. Navarro. — Voy a satisfacer al señor senador y a la Honorable Cámara. Precisamente la Comisión había observado el párrafo 2º del artículo 2º del proyecto en discusión, que dice. (*Leyó*).

Por esta cláusula, las causas en que alguna provincia sea parte en el pleito, ya sea actora, ya demandada, viene a estar bajo la jurisdicción de los jueces de sección, mientras que el artículo 101 de la Constitución dice que en todos los asuntos pertenecientes a embajadores, ministros públicos y cónsules, y en los que alguna provincia fuere parte, pertenece originaria y exclusivamente su conocimiento a la Corte Suprema. No puede, pues, estando al rigor de las prescripciones de la Constitución, una provincia ser parte, actora ni demandada, ante el juez de sección. En vista de esto, la Comisión ha conferenciado con los señores de la Corte Suprema, para ver cómo conciliar este negocio, porque se habían hecho observaciones a este respecto en el seno de la Comisión y creímos que tal vez fuera por alguna equivocación. Mas los señores de la Corte Suprema nos observaron que está dispuesto así, porque habiendo ellos consultado las leyes orgánicas de los Estados Unidos, habían notado que allí mismo se habían sometido a los jueces de sección las cuestiones en que alguno de los Estados fuera parte. Así se ha interpretado también por el Congreso de los Estados Unidos, que no ha hallado inconveniente en que los juicios en que sea parte un Estado, pueden empezar en primera instancia en los juzgados de sección; primeramente, por los grandes inconvenientes que podían ofrecerse para que los Estados situados a grande distancia de donde reside el Tribunal Supremo, pudieran ir a ventilar sus negocios a la residencia de la Corte, y en segundo lugar, porque aunque estas causas fueran iniciadas ante los juzgados de sección, venían a terminar ante la Corte Suprema por el recurso de apelación.

Entre nosotros, como he dicho antes, la prescripción constitucional hace exclusivas de la

Corte Suprema aquellas causas en que alguna provincia sea parte; pero también militarían entre nosotros las mismas razones de conveniencia para que esas causas comiencen en los juzgados de sección y vengan a terminar ante la Corte Suprema por el recurso de apelación. La Comisión no ha querido insistir en hacer ninguna innovación sobre esto, porque quizá lo que ha querido la Constitución es dar una garantía de que esos asuntos no terminen en los juzgados de sección, sino en la Corte Suprema, dejando siempre el recurso de apelación para ante ella. No me parece, pues, que este sea un inconveniente porque de todos modos la provincia demandada puede comparecer por medio de un procurador; la provincia en este caso será representada como una corporación o una comunidad. Por consiguiente, la Comisión no ha querido hacer ninguna innovación a este respecto. Sin embargo, si la Cámara no lo admite, estaremos por lo que ella resuelva.

Sr. Alsina. — El señor miembro informante y el Senado también, convendrán en que las explicaciones que aquél se ha esforzado en dar no son bastante satisfactorias; todo lo contrario. El siente lo que todos sabemos; pero no es ese el caso. La Constitución dice que en tal género de causas no habrá sino un solo y exclusivo juez, que lo será la Corte Suprema.

Viene este proyecto y dice: de ese mismo género de causas no será juez único la Corte Suprema; lo será en primera instancia el juez seccional, y la Corte Suprema sólo en los grados superiores. Se infringe, pues, abiertamente la Constitución; eso no puede desconocerse. Tampoco el Cuerpo legislativo está autorizado para derogar así un precepto terminantísimo de la ley de la Nación.

La razón de conveniencia, que es en la que ha insistido el señor miembro informante, es indudable; pero ella no basta para los hombres que componemos un cuerpo no constituyente. En Estados Unidos, como todos lo sabrán, por repetidas veces, desde que se sancionó su Constitución, ella ha sido alterada, pero lo ha sido en la forma que ella prescribe, y son numerosísimas las enmiendas que sucesivamente se le han ido haciendo. El Congreso puede allí modificar un artículo que esté en la Constitución o establecer otro; pero nosotros no podemos hacer eso en esta forma al dar una ley particular; es muy diferente el caso.

La conveniencia aconseja, sin disputa, que se haga esa alteración; pero obsta hoy a ello la necesidad de observar una prescripción inconveniente porque no podemos alterar, por medio de leyes orgánicas, la ley fundamental.

Tanto es así, que cuando en el año anterior redactábamos, en unión con el señor miembro informante y con otros señores, el proyecto de ley que fué sancionado, estableciendo la justicia nacional, yo quise proponer a la Comisión una alteración esencialísima, importante; pero me abstuve porque ella era opuesta al precepto constitucional. La Constitución que nos rige, dice que el conocimiento de aquellas causas en que se interesen vecinos de distintas provincias, pertenece a la justicia nacional. Disposición absurda, disposición disparatada, disposición que fué adoptada en Estados Unidos, de donde es copiada, por la presión de ciertas circunstancias; fué una medida casi local y que allí tuvo razón de ser; pero aquí, entre nosotros, es opuesta a todos nuestros principios; es opuesta al espíritu que debemos procurar infundir en las provincias que componen la Nación.

Señor: que el vecino de San Luis que tenga que promover un pleito a un vecino de Tucumán, no ha de ir a demandarlo ante la justicia local de Tucumán, sino que ha de ir a hacerlo ante la justicia nacional, es un principio disolvente, es un principio que en Estados Unidos fué establecido por obedecer a las exigencias de una rivalidad torpe, celosa, pero extrema, como la que se desplegó en aquellos Estados cuando llegaron a su independencia.

No había entonces un solo Estado que no desconfiara de los demás. Dijeron entonces: si un ciudadano mío va a buscar justicia en los tribunales de aquel otro Estado, se le ha de hacer precisamente una injusticia; y para que no sea así, establezcamos que debe ocurrir a los tribunales nacionales. De ahí vino esa resolución. Pero nosotros, señores, que aspiramos a formar una sola Nación, donde jamás ha habido esa división de Estados independientes constituidos, no debíamos conservar una disposición que rompe nuestras más inveteradas tradiciones y hábitos judiciales, pues siempre y en toda época, el demandante ha ocurrido sin dificultad alguna a las justicias particulares de la provincia en que reside el demandado; debíamos desterrar de nuestras instituciones y de nuestras leyes, todo lo que tiende a producir o a conservar vivos en las provincias los odios mutuos y las desconfianzas. Lo contrario no sería guardar consecuencia con ninguno de los principios que invocamos. Es preciso, por el contrario, señor, tender a que el vecino de Salta se persuada que ha de encontrar justicia en los tribunales de Buenos Aires; que el hijo de Buenos Aires tenga confianza en la justicia que se le ha de adminis-

trar en Mendoza; que los vecinos de Santiago tengan confianza en los tribunales de San Luis. Este es el modo de estrechar el vínculo nacional, y a esto deben propender nuestras leyes... Pero observo que me distraigo. A pesar de estas convicciones, tuvimos que consignar en el proyecto que se sancionó, la absurdidad de que correspondía a la justicia nacional el conocimiento de esas causas, porque así lo dice la Constitución, la ley fundamental que nos rige, y a la cual, mientras no sea reformada, debemos acatar. Véase, pues, cómo una razón de conveniencia, por poderosa que sea, no es bastante para ir frente a frente contra la disposición terminante de la Constitución nacional.

Así, señor, y vista la deferencia, que ya esperaba yo, y que hace honor a la Comisión, la cual parece que no se opondría a una alteración en este punto, yo la invitaría a suprimir esta parte; a fin de que quedara a ese respecto la jurisdicción, como está establecida en la Constitución. He dicho.

Sr. Villafañe. — Así como se ha hecho una observación sobre este artículo del proyecto en discusión, pudieran ocurrir algunas otras observaciones importantes, leyendo todos los artículos. Yo no veo inconveniente para que se lea, y si hay algunas observaciones que hacer, se hacen; si no se deja.

Sr. Navarro. — Así no acabaríamos.

Sr. Villafañe. — Tardaremos más tiempo; pero de ese modo tal vez haremos una cosa mejor.

Sr. Navarro. — Hace tiempo que el proyecto se ha repartido para que lo estudien los señores senadores.

Sr. Palma. — La observación que acaba de hacer el señor senador para que se lean los proyectos no me parece conveniente, porque este cuaderno es demasiado extenso; luego el señor senador ha tenido de tiempo atrás el cuaderno que todos tenemos, y por consiguiente ha tenido tiempo de sobra para leerlo. Además, puede tener el cuaderno en la mano y leerlo al mismo tiempo que se van votando los artículos; de lo contrario nos exponemos a que esta discusión sea demasiado larga. Sobre todo, esto de ponerse a leer aquí, a mi juicio, no importa nada, puesto que después de haberse leído algunos artículos, ya no nos acordamos de los primeros; y si fuéramos a leer en estos mismos bancos, el Senado representaría, en vez de cuerpo legislativo, un salón de lectura.

Sr. Madariaga. Yo desearía que la Cámara votase si ha de aceptar o no la modificación que ha propuesto el señor senador por Bue-

nos Aires, porque la encuentro completamente racional.

Sr. Villafañe. — Yo no me opongo, solamente he querido hacer esa indicación por que la creo conveniente.

Sr. Uriburu. — Después de la exposición que ha hecho el señor senador por Buenos Aires, la Comisión no ha tenido una buena razón para oponerse a esa modificación, puesto que ese artículo del proyecto ataca a una disposición que nos rige, y que manda que toda causa en que una provincia sea parte, corresponde originariamente a la Corte Suprema de Justicia. De consiguiente, no puede determinarse que corresponda a los juzgados de sección. Así es que hay que enmendar este artículo.

Sr. Navarro. — La Comisión no tiene inconveniente en que se suprima esa parte.

Sr. Uriburu. — Suprimiendo la palabra provincia no más, ya queda como está establecido en la Constitución.

Sr. Ministro de Culto. — Parece que no habrá inconveniente en suprimir el artículo desde que está conforme la Comisión, mucho más cuando ella no ha pretendido presentar una cosa perfecta. Por eso he dicho que hubiera sido de desear que este proyecto fuera discutido por la Cámara, por que mucho pudiera ganarse. Yo convengo en que son muy fundadas las observaciones del señor senador por Buenos Aires; pero en el caso de aceptar la modificación, creo que el artículo que se va a suprimir debe pasar al inciso 1º del artículo 1º. Así es que no es suprimirlo, sino trasponerlo.

Sr. Alsina. — Se entiende, si es que así quedan las cosas conforme las establece la Constitución.

Sr. de la Vega. — No comprendo como es esa trasposición, puesto que si se traspone el inciso 2º siempre quedaremos en el mismo caso.

Sr. Ministro de Justicia. — Entonces se le atribuye a la Suprema Corte lo que se le atribuirá a los jueces de sección.

Sr. de la Vega. — Entonces caeríamos en otro error, puesto que el inciso contiene algo más de lo que se ha dicho.

Sr. Navarro. — Lo que importa es atribuir a los jueces de sección las causas de provincia, las causas entre una provincia y los vecinos de otra provincia, etcétera. De manera que suprimiendo el párrafo, todo queda bien.

Sr. Presidente. — Yo creo que hay que ponerlo en el primer artículo.

Junio 27 de 1863

CAMARA DE SENADORES

23ª Reunión. 18ª Sesión ordinaria

Sr. Navarro. — No hay necesidad de alterar la numeración de los párrafos. El párrafo 1º del artículo 1º, puede ponerse así:

«1º De las causas que versan entre dos o más provincias y de las civiles que versen entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros.»

Sr. Presidente. — Así queda bien. Se va a votar si el punto está suficientemente discutido.

—Se votó y resultó afirmativa general. En seguida se votó el proyecto número 1 presentado por la Comisión, con la enmienda propuesta, consistente en trasladar al inciso

1º del artículo 1º el inciso 2º del artículo 2º en la forma leída por el señor Navarro y resultó aprobado por unanimidad.

Sr. Presidente. — Yo no sé si el Senado querrá continuar la discusión o dejarla.

Sr. Alsina. — Debe dejarse, tanto más, cuanto que un señor senador ha pedido que se leyeran todos los artículos para enterarse mejor. Como yo estoy persuadido que eso lo ha de obtener más fácilmente en su casa, debe suspenderse la discusión para dejar tiempo.

—La sesión se levantó a las cuatro de la tarde.